

El pensamiento del autor se refleja también en los apuntes críticos a la disciplina vigente. Esta tarea de ponderación y análisis de las normas jurídicas es una de los grandes servicios que se esperan de la doctrina y que no puede faltar en un texto dedicado al estudio del régimen positivo.

Entre las lagunas de la regulación codicial señala, por ejemplo, la no concesión de competencia a regiones y provincias eclesiásticas para la erección de asociaciones (pp. 68-70), así como al obispo diocesano para autorizar que una sección de una asociación privada nacional —al contrario de lo que sucede en el caso de las públicas— pueda constituirse en la diócesis. Esta falta de competencia resultaría, a su juicio, incoherente con la función general de vigilancia propia de la autoridad diocesana (p. 112). Obvio es decir que, en su opinión, tales lagunas deberían ser cubiertas.

Considera, por otro lado, que la vigente solución legislativa no es la adecuada en algunos puntos, como, por ejemplo, a propósito de la incompetencia de la Conferencia Episcopal en la función de vigilancia sobre las asociaciones nacionales. El autor permanece firme en esta postura, congruente, por otra parte, con su interpretación de la actuación de las asociaciones públicas *in nomine auctoritatis Ecclesiae* (pp. 74-76).

Hay otros aspectos a los que podría hacer referencia, pero pienso que los ya mencionados bastan para hacerse una idea cabal del alcance del libro. Para terminar —aunque me parece que se trata de una afirmación suficientemente ilustrada—, diría que no nos encontramos ante una obra que pretenda *salir del paso* sino, muy al contrario, que se esfuerza

por dar respuestas y ofrecer soluciones. Encuentro la prueba definitiva en las páginas que dedica a señalar criterios de identidad de las asociaciones de fieles. Sólo quien tiene una sólida formación teórica y una experiencia no menos destacada en el gobierno y en la interpretación del derecho puede arriesgarse a indicar, concretamente, los criterios de distinción entre asociaciones públicas y privadas. Es la tarea que Mons. Martínez Sistach realiza con éxito, en mi opinión, en el último capítulo del libro. Una consulta obligada para los operadores jurídicos que se enfrentan con el quebradero de cabeza que supone tantas veces determinar la naturaleza y el régimen jurídico correspondiente de las asociaciones en la Iglesia.

JORGE OTADUY

Otaduy, Jorge - Tejero, Eloy - Viana, Antonio (eds.), *Migraciones, Iglesia y Derecho. Actas del V Simposio del Instituto Martín de Azpilcueta sobre «Movimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y canónicos»*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2003, 247 pp.

El profesor Velasio De Paolis hace un cuadro descriptivo de «la Iglesia y las migraciones en los siglos XIX y XX» (pp. 15-48). Se llegó muy pronto a considerar el fenómeno migratorio como una gran *chance* para la expansión de la fe católica a otros países. El autor se detiene preferentemente en el aspecto jurídico canónico y señala una doble historia que ha de tenerse en cuenta: la de la migración, que en cuanto fenómeno social se desarrolla fuera de la Iglesia, y la de la respuesta con que la Iglesia la

delimita a través de sus intervenciones, que constituyen las etapas a lo largo de las cuales ha ido elaborando su pastoral para las migraciones. El autor da en primer lugar una visión sintética de algunos elementos históricos particularmente relevantes en los dos últimos siglos, mostrando cómo la Iglesia se ocupó de la asistencia pastoral de los emigrantes, gente con frecuencia pobre. La const. ap. *Exsul Familia*, de 1952, constituye la *magna charta* de la pastoral para emigrantes y abre nuevos horizontes, frente a las migraciones del mundo no cristiano hacia países de tradición cristiana. El prof. De Paolis estudia las principales intervenciones de la Iglesia: la *Exsul Familia*, el Concilio Vaticano II, los documentos de aplicación del Concilio, el Código de derecho canónico, que prevé nuevas estructuras para hacer frente a las situaciones en las que no basta la cura ordinaria, como las prelaturas personales. Luego el autor analiza los elementos esenciales para una pastoral de los emigrantes: tiene que ser una pastoral que nace del misterio de la Iglesia; que se verifica en la experiencia concreta e implica a todo el Pueblo de Dios, en el respeto del papel de cada uno, a nivel individual o asociado; que tiene su organización propia; que se adapta y renueva; que es provisional y de transición, siendo cumulativa con la pastoral parroquial territorial, y prevista para tres generaciones. Las nuevas formas de emigración son una llamada a una reflexión sobre la pastoral tal como se vive, para adaptarla a las nuevas situaciones. Cabe señalar finalmente que la emigración participa en la evangelización, en un doble sentido: la Iglesia (emigrantes cristianos) que va a la misión, misión (emigrantes no cristianos) que va a la Iglesia.

«Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia» (pp. 49-82), es el tema tratado por el profesor Eduardo Baura. Después de recordar también la actividad de la Iglesia ante el fenómeno migratorio, el autor apunta algunas consideraciones básicas, para señalar cuáles son las premisas de las que parte la atención a los derechos de los fieles emigrantes. Estos presupuestos eclesiológicos son el principio de igualdad (a la hora de organizar las actividades pastorales se ha de tener en cuenta que no hay en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad), la catolicidad de la Iglesia particular (que «ha de ser Iglesia y, por tanto, no puede estar cerrada a visiones particularistas»), el principio de territorialidad (que ha de comprenderse «desde la óptica de la comunión») y la universalidad del sacerdocio (lo que implica que «la Iglesia de origen no puede desentenderse de los fieles que emigran ya sea de manera temporal o definitiva»), la misión pastoral de la Iglesia (que no puede reducirse a una tarea material, so pena de «grave empobrecimiento»). Llegado a este punto, el prof. Baura afirma la existencia de los derechos fundamentales de los fieles, que «son bienes que se integran en la *communio*», y muestra su aplicación a los fieles en la situación de los emigrantes: derecho a la propia opinión y a la información, a practicar la propia forma de vida espiritual, a ejercer el apostolado, derecho de reunión y de asociación, derecho a la adecuada atención pastoral: hay que entender la posición jurídica del fiel dentro de una circunscripción eclesiástica como principalmente de beneficiado y de libertad. Puede elegir el ministro de los bienes salvíficos, sin que el Pastor pueda tacharlo de insolidario «porque no parti-

cipa en las iniciativas locales o porque ejercita su derecho a practicar la propia forma de vida espiritual». En conclusión, el autor delinea las características de la debida atención pastoral a los emigrantes: especialización, disponibilidad ministerial, personalidad, elasticidad organizativa, servicio.

El profesor Alban d'Entremont interviene con una comunicación sobre «aspectos demográficos y sociales de las inmigraciones» (pp. 83-107). Estudia las razones de las migraciones, y la problemática económica y social que plantea; los argumentos de tipo económico suelen encubrir, escribe, la grave cuestión del rechazo de los inmigrantes por racismo o xenofobia. Describe a continuación la inmigración en Europa, y luego en España, procedente del África subsahariana; estos inmigrantes son seguidos muy de cerca por inmigrantes de países latinoamericanos y asiáticos —sobre todo Ecuador y China—. Interrogándose por la inmigración y el futuro, recuerda el autor el *Programa Global de Regulación de la Extranjería* y la *Inmigración en España* del Gobierno central, en el que se otorga un estatuto de preferencia a los inmigrantes latinoamericanos, lo que «no significa (...) exclusión de los inmigrantes de otras áreas geográficas, pero sí la constatación de que la garantía del bien común de la nación puede admitir una cierta predilección para aquellos contingentes de inmigrantes que tengan las mayores posibilidades de hacer una contribución activa».

El paso siguiente lleva a estudiar la «legislación española de extranjería: evolución y experiencias en su aplicación» (pp. 109-133). Lo hace la profesora María Elena Zabalo Escudero, que delimita primero el marco normativo de los derechos de los extranjeros: Ley Orgánica so-

bre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social de 22 de diciembre de 2000, su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto de 20 de julio de 2001, normativa que está en vía de ser reformada. ¿Qué derechos reconoce a los extranjeros la ley vigente?: ejercitan sus derechos en las mismas condiciones que los españoles, y gozan de las libertades públicas que garantiza la Constitución española. Se dan diferencias según se trate de extranjeros *residentes* o *no residentes*. Se detiene la autora en dos temas concretos: el derecho al trabajo, que es limitado ya que está sometido a una expresa autorización y el Ministerio del trabajo y Asuntos sociales fija anualmente un contingente de trabajadores extranjeros; otro tema es la vida familiar del extranjero, estudiando en especial los familiares reagrupables: cónyuge, hijos, representantes legales del reagrupante, ascendientes.

«La atención a los inmigrantes desde el tercer sector» (pp. 135-150) está estudiado por el profesor José Sánchez Faba. Parte de la realidad: importancia de la inmigración actual, causas de la inmigración, y los inmigrantes en España ante la legislación, para emitir un juicio crítico sobre la inmigración, que, desde un punto de vista puramente económico, ofrece valores positivos y contravalores. El autor pasa revista a criterios filosóficos, bíblicos y de doctrina de la Iglesia para concluir que «la inmigración ha de aceptarse desde valores cristianos, e incluso desde valores simplemente humanos como los que inspiran el comportamiento democrático». Hablando de «acción», subraya que una vez que los inmigrantes han llegado a un país, «deben ser acogidos, porque para el cristiano no hay personas *irregulares*: ningún

ser humano es *irregular* ni *ilegal*». Derribar las barreras que nos separan de los inmigrantes constituye un desafío a la *imaginación de la caridad* e invita a una *pedagogía del encuentro* con personas que no comparten nuestra fe y nuestra cultura. De ahí la necesidad de una acción social interior y de una acción internacional en los países de procedencia de la inmigración. Acaba su exposición el prof. Sánchez Faba exponiendo el programa de Cáritas Española.

Con la profesora Zoila Combalía nos interesamos en la «inmigración y tutela de los derechos de libertad religiosa en España» (pp. 151-170). Las peculiaridades en la tutela de la libertad religiosa se plantean únicamente para la inmigración procedente de ámbitos culturales-religiosos diferentes del nuestro. En todo caso, «exige garantizar la no coacción y la libre manifestación y práctica de las propias creencias, todo ello dentro de los límites establecidos», lo que «requiere, cuando sea necesario, una actividad positiva de los poderes públicos dirigida a promover las condiciones y remover los obstáculos que dificulten el ejercicio de tal libertad». La autora estudia en especial el Acuerdo de 1992 con los musulmanes: «el problema no está en el pañuelo de Fátima ni en la dieta del preso musulmán, afirma. El problema real está en el fondo, en el modo de entender la libertad religiosa y las relaciones entre el Estado y las confesiones». Pero hay que reconocer que una dificultad viene de que el modelo de estas relaciones «está pensado y articulado para la cooperación con la Iglesia católica».

«La Sede Apostólica y la organización de la asistencia pastoral a los inmigrantes» (pp. 171-202) es el tema que corre a cargo del profesor Antonio

Viana. Habla primero de la vigencia de las normas canónicas especiales sobre la inmigración y de la importancia de la asistencia espiritual, «religiosa» y pastoral a los emigrantes, obligación de la Iglesia, paralela al derecho de los inmigrantes a recibir el anuncio salvífico. Los emigrantes católicos y no católicos son los destinatarios de esta asistencia religiosa, lo que plantea las grandes cuestiones del diálogo interreligioso. La atención religiosa a los emigrantes presenta un carácter peculiar: es una «expresión concreta de la solicitud debida por la Iglesia universal y las Iglesias particulares; es servicio y satisfacción de derechos que corresponden al fiel en cualquier parte, con mayor motivo cuando la separación de su Iglesia particular de origen y las dificultades de comunicación en el lugar de residencia le impiden el acceso a la vida parroquial ordinaria». El prof. Viana enumera unos principios informadores de la atención religiosa a los emigrantes: el respeto al patrimonio cultural y religioso de los emigrantes, la participación de todos los fieles en ese apostolado especial, y la necesaria colaboración entre las Iglesias particulares de origen y de destino de los emigrantes. Describe a continuación la organización de la cura pastoral de los emigrantes, organización en la que el principio de personalidad del derecho tiene una especial relevancia: «hoy ha perdido relevancia la cuestión de si la cura pastoral de los emigrantes debía organizarse *praeter legem* o incluso *contra ius commune*, cuestión que se planteaba en el marco del CIC de 1917, estrictamente territorialista». Existen oficios y comunidades en la Iglesia particular: capellanías, misiones con cura de almas, parroquias personales, delegados para los capellanes de emigrantes, directores, vicarios episcopales;

y estructuras en el ámbito interdiocesano: conferencias episcopales como instancias promotoras del apostolado y pastoral a favor de estas personas, diócesis personales, prelaturas personales expresamente mencionadas en la instr. *Nemo est, de pastoralis migratorum cura*, de 1969, y la exhort. ap. *Ecclesia in America*, de 1999; instituciones de la Curia romana. Todo ello pide una coordinación con las Iglesias locales: «el ejercicio de la cura de almas a favor de los emigrantes tiene aspectos directamente dependientes de la potestad del obispo diocesano. En segundo lugar, la potestad de quienes atienden a los emigrantes es cumulativa con la de los pastores de la diócesis».

El profesor José Magaña Romera trata la cuestión de las «competencias y actuaciones de las Conferencias episcopales a favor de los emigrantes» (pp. 203-213). Las normas de la Santa Sede piden a las Conferencias episcopales constituir una Comisión episcopal de Migraciones que será la responsable de promover y alentar esta pastoral, cuyo trabajo se realizará —por lo menos se ve muy conveniente— en conexión y coordinación con el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes. Enumera el autor las tareas que corresponden a esta Comisión episcopal, basándose en la experiencia de la Conferencia episcopal española, cuyo trabajo se dirige a la emigración española y la inmigración en España.

Finalmente el profesor José San José Prisco aborda la temática de «los emigrantes en la Iglesia particular» (pp. 215-242), en base a las respuestas a un cuestionario enviado a los responsables diocesanos, respuestas que figuran en anexo. Parte de unas constataciones previas: el nuevo orden económico mundial

y su repercusión en las migraciones, la percepción del problema desde España, el papel de la Iglesia. Con ello puede afrontar la situación de las diócesis españolas, con una constatación previa: el problema migratorio reviste una importancia considerable, pero esta sensibilidad acerca del fenómeno migratorio «no siempre va acompañada de los instrumentos necesarios para que esta pastoral especializada tenga su lugar propio y cuente con líneas claras de actuación». Después de estudiar la procedencia de los inmigrantes en las Iglesias locales, el autor se pregunta sobre los medios personales de los que se dispone y de su formación para una «tarea integral realmente evangelizadora», y sobre la atención primaria de acogida de las personas y anuncio explícito y propuesta respetuosa del Evangelio. El último epígrafe describe las estructuras eclesiales para la atención a los inmigrantes, con una cierta inevitable repetición de lo ya dicho: parroquias personales, capellanes o misioneros de emigrantes, el Secretariado diocesano de Migraciones destinado por un lado a ejercer una función coordinadora de todas las fuerzas pastorales vivas; por otro, «a diseñar acciones concretas y servicios especializados que puedan ser de utilidad a los agentes directos; y en tercer lugar, a apoyar las iniciativas tomadas por otros, siguiendo el principio de subsidiariedad que debe estar siempre presente».

DOMINIQUE LE TOURNEAU

Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (a cura della), *Codice di diritto canonico commentato*, ed. Ancora, Milano 2001, 1536 pp.

En el panorama de las existentes ediciones bilingües del Código de Derecho Canónico comentado en distintos